



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ

**Periodismo propaz:
violencia urbana en el contexto del postacuerdo**

Trabajo de grado para optar al título de comunicador social

**Suscrito por
Nicolás Rojas Castañeda**

**Bajo la dirección del profesor
Juan Guillermo Arias Marín**

Bogotá, julio del 2019

Tabla de contenido

Presentación: ¿En qué consiste este trabajo?.....	3
1. Consideraciones teóricas previas.....	5
1.1 Violencia.....	5
1.2 Periodismo preventivo.....	7
1.3 Periodismo propaz.....	7
2. Objetivos.....	9
3. ¿Quiénes se benefician con este conocimiento?.....	10
4. Marco referencial.....	11
4.1 Conflicto armado en Colombia: actores, zonas y problemáticas.....	11
4.2 Procesos de paz.....	12
4.3 Las urbes en el conflicto.....	13
4.4 Resituación de Bogotá en el conflicto armado.....	13
4.5 Una mirada a las políticas públicas de la juventud.....	14
4.6 Sobre la niñez y la juventud y su vínculo con la violencia.....	17
4.7 Periodismo al servicio de las soluciones a esta problemática.....	19
5. Productos periodísticos propaz.....	21
• El conflicto armado también está en los barrios.....	22
• «La firma del acuerdo de paz no es revolución y mucho menos impunidad por decreto».....	32
• El cuadrilátero fue una selva de cemento.....	38
• Ciudad Bolívar pinta con su gente un nuevo futuro.....	43
Referencias.....	48

Presentación: ¿En qué consiste este trabajo?

La pobreza es para los niños y adolescentes una situación de riesgo y vulnerabilidad, ya que sufren privación de recursos materiales, emocionales, educativos y espirituales, y en ocasiones los priva de desarrollar su pleno potencial en una sociedad. En consecuencia, dichas limitaciones están asociadas a la precariedad en los servicios básicos, violencia intrafamiliar, la discriminación y la exclusión social, entre otros factores, que afectan al menor psicológicamente y perjudican gravemente su desarrollo, exponiéndolo a problemas como la drogadicción, el alcoholismo, los embarazos no deseados o la delincuencia común.

Así mismo, gran parte de los menores en situación de indigencia son víctimas de algún tipo de maltrato físico o psicológico en sus hogares y, por tal motivo, lo abandonan en busca de otro tipo de refugios, tales como parques, edificios abandonados o, en el peor de los casos, calles, que se convierten en epicentros de la delincuencia, como en su momento lo fue el Bronx. Otro porcentaje vive en la indigencia por su adicción a las drogas, que puede surgir de un hogar disfuncional que los lleva a consumir. La salida que tienen estos jóvenes para subsistir son la prostitución o la delincuencia.

El Distrito Capital, por medio de la Secretaría de Integración Social y el Bienestar Familiar, han adecuado espacios donde los menores en situación de abandono puedan ser atendidos. En ocasiones se les entrega un subsidio de 260.000 pesos para que puedan vivir sin necesidad de recurrir a la indigencia

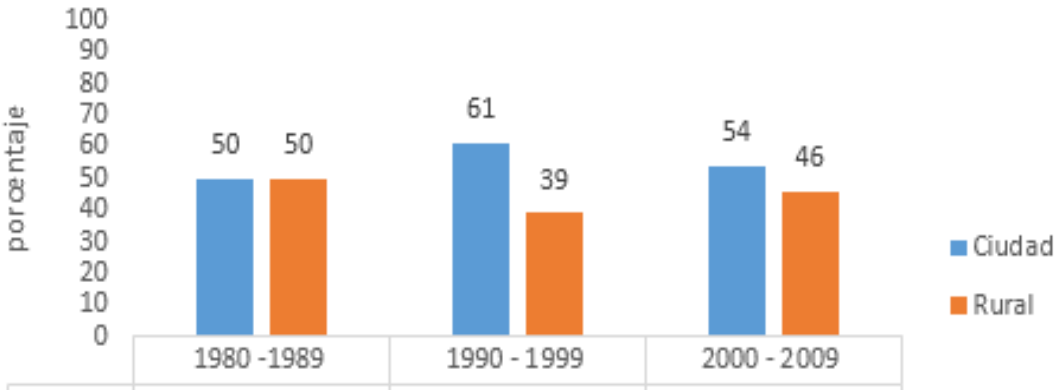
También existe el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Idipron, entidad que desde 1967, para atender las necesidades de los jóvenes en las calles, diseñó un modelo pedagógico basado en el afecto, la libertad y exploración de sus aptitudes, para brindarles una segunda oportunidad en la vida por medio de sus planes institucionales: *Calles alternativas*, que hoy vincula a 21.917 niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, de indigencia y en condiciones de fragilidad para la protección y restitución de sus derechos; *Distrito Joven*, el cual brinda oportunidades

de competencias educativas y laborales para jóvenes en situación de calle para el reconocimiento de sus actividades intelectuales; y *Espacios de integración social*, que facilita el acceso a infraestructuras físicas que brindan seguridad y apoyo a los menores en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, el objetivo de este trabajo es rescatar, mediante productos periodísticos, las historias de los jóvenes que han estado en situación de vulnerabilidad y que, por medio de estrategias educativas, como las ejecutadas por el Idirpon, recibieron una segunda oportunidad de vida.

Carlos Mario Perea (2013), psicólogo, historiador y doctor en estudios latinoamericanos, ha analizado el papel de las urbes en la construcción de paz, narra la creciente urbanización en el país para mostrar su relación inversamente proporcional con la dimensión de sus violencias. Luego se enfrentan los vínculos entre conflicto armado y ciudad, para después contextualizar la incidencia de lo urbano con las dinámicas de los conflictos en lo nacional y lo regional, que, según su referido trabajo, aporta el 70 % de la violencia en el país (Perea, C. M., 2013).

Homicidios en ciudades y pueblos de Colombia, entre 1980 y 2010



Fuente: Perea, C. M., 2013

1. Consideraciones teóricas previas

El enfoque preventivo dentro del periodismo propaz —esto es, en favor de la paz— busca narrar las investigaciones de su punto de partida, involucrando los actores dentro del problema, el contexto de la noticia y repercusiones finales. En este sentido, es importante informar sobre el origen del conflicto armado urbano como génesis de la violencia urbana y colectiva en los hogares con menos oportunidades económicas y laborales. También es pertinente hablar sobre las organizaciones o iniciativas que planteen estrategias para disminuir las amenazas a quienes viven en fragilidad social, para lograr que quienes están en situación de calle superen su condición y evidencien una mejoría en su entorno. El trabajo puede ser un punto de partida para motivar acciones en cohesión entre la ciudadanía y las instituciones para trabajar por los jóvenes en situación de vulnerabilidad, alejarlos de la delincuencia, la drogadicción, la prostitución y el vandalismo.

1.1 Violencia

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia o que muy probable tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte (OMS, 2002). La OMS clasifica la violencia en tres categorías generales:

- la violencia autoinfligida, en personas con comportamientos suicidas y autolesiones.
- la violencia interpersonal, que se puede observar en ámbitos como el familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco.
- la violencia colectiva, de la sociedad más ampliamente entendida, con connotaciones políticas y económicas.

1.1.1 Violencia colectiva:

Según Juan Ramón de la Fuente, médico y psiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unam, este tipo de violencia ocurre cuando los miembros de un

grupo se identifican a ellos, en forma transitoria o permanente, con el propósito de atentar contra otro grupo por motivos políticos, sociales o económicos. Tal definición incluye guerras, terrorismo o la violencia perpetrada por el Estado. También la violencia motivada por actos de odio, por la condición sexual, social, por afanes de lucro y violación de los derechos humanos (De la Fuente, J. R., 2017).

1.1.2 Violencia urbana

La violencia urbana, como su nombre lo indica, es la que ocurre en la ciudad, no distingue clase social, sexo, raza o religión. Puede ser violenta la persona que viva en una urbanización residencial como el que vive en un asentamiento humano. En la violencia urbana no se puede dejar de lado la premeditación y alevosía con la que las personas actúan o cometen una infracción contra la ley, con una clara y abierta predisposición a la violencia. Así, la violencia urbana sería aquella ejercida en el marco de las relaciones sociales mediadas por la convivencia urbana, cuyas expresiones más frecuentes son el robo a mano armada, las amenazas, las agresiones, los golpes, los secuestros y el homicidio (Medrano, V. Z., 2010).

Para el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional, IDRC, por sus siglas en inglés, estas son las principales causas de la violencia urbana:

- La pobreza y exclusión de los mercados laborales, capitales o de tierras y las desigualdades sociales.
- La falla de la gestión de los estados o la corrupción institucional.
- La falta de expectativas y la desesperanza pueden conducir a frustraciones e ira, un factor determinante para la violencia en las calles.
- La mala gestión urbanística y la falta de planificación de las ciudades puede conllevar a conflictos de territorio, económicos y sociales que pueden desembocar en violencia.
- Los conflictos armados y las guerras generan falta de oportunidades laborales, violación de los derechos humanos fundamentales como el de la vida y condiciones de pobreza extrema.
- Las injusticias sociales que benefician a unos y desfavorecen a otros.

1.2 Periodismo preventivo

La intención de ofrecer algo útil, diferente y concreto desde el ámbito de la información respecto a la prevención de conflictos armados y diversos tipos de crisis, motivó desde el 2003 a un grupo de periodistas y profesores universitarios, liderados por Bernabé Fraguas, a trabajar sobre este concepto e intentar dotarle de una consistencia suficiente, en fondo y forma, para que fuese aplicable como metodología de trabajo. Todo este proceso fructificó en la creación del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional, IPPAI (Bernabé, J., 2004).

Según el IPPAI, el periodismo preventivo es una disciplina periodística que pretende analizar las crisis y conflictos desde un punto de vista integral, desde sus orígenes hasta su estallido y posteriores repercusiones. El enfoque del periodismo preventivo también busca dar mayor relevancia mediática a aquellos actores que propongan soluciones a las crisis. Este enfoque supone una crítica de facto del periodismo convencional, considerado por los adherentes al periodismo preventivo como demasiado focalizado en la noticia descontextualizada y en los actores beligerantes (Árevalo, A. I., 2014).

El IPPAI señala estos tres puntos como las funciones principales del periodismo preventivo:

- Anticiparse a los acontecimientos que pudieran desembocar en un conflicto armado, crisis institucional, crisis social, crisis humanitaria, crisis de derechos humanos y/o crisis medioambiental.
- Informar del desarrollo de dichas situaciones poniendo especial atención en los esfuerzos que se estén realizando, tanto por las partes implicadas como por mediadores externos y otros actores de relevancia en el entorno de estas situaciones.
- Realizar un seguimiento de los acontecimientos una vez finalizados, informando de las posibilidades de que se reproduzcan y bajo qué circunstancias esto sería posible.

1.3 Periodismo propaz

El periodismo tiene una gran responsabilidad en el marco de la implementación y ejecución de los diálogos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y la extintita

guerrilla de las Farc. Es deber del periodista dar a conocer a la opinión pública los principales avances y retrocesos alrededor de la implementación. Por otro lado, deben aprender a manejar con responsabilidad el qué y cómo publican la información para no afectar con desinformación la transición de los desmovilizados a la vida civil.

Humbert Gehring, político y representante de la Fundación Konrad Adenauer en Bogotá, explica que una de las facetas necesarias para el posconflicto y construcción de una paz sostenible es la comunicación (Gehring, H., 2014). Para construirla no solo se necesita de la información oficial del Gobierno alrededor de la paz. También de la labor de visibilización y sensibilización que medios y expertos en el campo de la comunicación pueden ejercer de manera responsable (Gehring, H., 2014). En este sentido, es de suma importancia que los comunicadores y periodistas reflexionen sobre la importancia y responsabilidad de la información a la hora de construir y divulgar investigaciones, testimonios, reflexiones y narraciones sobre el conflicto armado y lo que significa la construcción de paz.

Como lo dijo Johan Galtung, pionero en la investigación para la paz, los comunicadores y periodistas tienen un papel histórico al traducir las guerras en sus tránsitos hacia la reconciliación (Consejo de Redacción, 2014). Para ello, es importante utilizar diferentes herramientas como la crónica y el reportaje, para promover el impacto que puede lograr divulgar historias de paz y buenas noticias en el sentido que pueden llevar un mensaje de reconciliación y generar un ambiente favorable a la paz.

Objetivos

2.1 Objetivo principal:

- Presentar historias de paz de jóvenes y niños inmersos en el conflicto urbano, de jóvenes y niños que han recibido ayuda de terceros para salir de situaciones como la delincuencia, la drogadicción o la indigencia.

2.3 Objetivos secundarios:

- Visibilizar la violencia urbana como factor determinante del conflicto armado en Colombia.
- Involucrar los actores del conflicto a partir de sus orígenes, su estallido y posteriores repercusiones.
- Visibilizar las causas y consecuencias que llevaron a promover alternativas de solución al conflicto por medio de personas o instituciones.

2. ¿Quiénes se beneficiarían con esta clase de conocimiento?

La comunidad académica interesada profundizar sus conocimientos sobre la violencia urbana, los lectores apasionados en busca de otro tipo de historias y narrativas y el público del común con la intención de informarse sobre el tema.

3. Marco referencial

4.1 Conflicto armado en Colombia: actores, zonas y problemáticas

El origen de la guerra en Colombia tiene hondas connotaciones políticas y coincide con la fundación del país como estado independiente. Son varios los libros de historia que hacen referencia a los enfrentamientos entre centralistas y federalistas en la Patria Boba; la Guerra de los Supremos, entre los clérigos, los militares y terratenientes contra los negros, campesinos e indígenas por la ley que buscaba abolir la esclavitud; las tensiones generadas durante los Estados Unidos de Colombia entre los diferentes departamentos que la conformaban; además de la Guerra de los Mil Días, entre liberales y conservadores, por las condiciones económicas y políticas con las que cada partido administraba el país durante su gobierno (Gómez, A., 2018).

Después del fenómeno violento de los cincuentas, apaciguado posteriormente por la dictadura de Rojas Pinilla, en 1953, el acuerdo bipartidista suscrito en el Frente Nacional generó cierta estabilidad política en el país. Pero muchos procesos de resistencia y autodefensa campesina que venían gestándose desde la violencia se reforzaron por la Revolución Cubana en 1959. En este sentido, el conflicto se matizó en la formación de ejércitos rurales y urbanos con el ideal de imponer un sistema político, económico y social en el país. Las Farc son el resultado de procesos que se entretajeron de forma paralela con distintos fenómenos locales y regionales (Saumeth, E., 2011). Esto construyó los cimientos de grupos subversivos juveniles y contestatarios universitarios, que posteriormente se expresaron en movimientos guerrilleros con operación rural: ELN en 1964; EPL en 1967; y M-19 en 1970.

A medida que pasaba el tiempo, el conflicto se fue agudizando, producto de la delincuencia común, la pobreza, el desempleo y el interés del campesinado por impulsar una reforma agraria. A esto se sumaron factores exógenos como la siembra, inicialmente de marihuana, y posteriormente de coca, además del surgimiento de los paramilitares y el narcotráfico, la génesis para la guerra entre los carteles de Cali y Medellín, que utilizaban jóvenes de las comunas para sus confrontaciones.

Colombia posee 1.122 municipios registrados en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, incluyendo los siete distritos especiales. Según la Presidencia de la República, 344 han sido los más afectados por el conflicto armado. Los de mayor densidad están en los departamentos de Antioquia, 55; Nariño, 23; Cauca, 22; Tolima, 21; Meta, 20, y Norte de Santander, 12, registrados en la lista de las zonas más afectadas por el conflicto, Zomac.

3.2 Procesos de paz

El conflicto armado en Colombia se caracterizó por ser el de mayor duración en América Latina, pues se inició en 1964 con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Continuó tres años después, con la creación del Ejército Popular de Liberación, EPL, y en 1970 con el Movimiento 19 de Abril, M-19.

Es por ello que, como un contrasentido, Colombia tiene también una vasta experiencia en la negociación y desmovilización de grupos subversivos. Como antecedente podemos contar con el surgimiento del partido político Unión Patriótica. UP, cuando el Movimiento Autodefensas Obreras, el Frente Simón Bolívar y Antonio Nariño, del ELN, y algunos miembros de las Farc dejaron las armas en 1985. El 9 de marzo de 1990 se firmó el acuerdo de paz con el M-19, y el 15 de marzo de 1991, con la desmovilización del EPL bajo los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, respectivamente.

Con las Farc se negoció en siete ocasiones: 1981, bajo el gobierno de Julio César Turbay, en los diálogos dirigidos por Carlos Lleras Restrepo; 1982, bajo el gobierno de Belisario Betancur; 1984, con la firma del acuerdo de La Uribe; en 1988, con la iniciativa de Virgilio Barco. Pero ante la negativa de las Farc por el genocidio de la UP, en 1991, la intención fue de Cesar Gaviria de hacer las negociaciones en Tlaxcala, México. En 1999, en el gobierno de Andrés Pastrana; y 2016, con la firma del Acuerdo del Teatro Colón entre el Gobierno Nacional y el grupo armado (Torres, C., 2005).

Las urbes en el conflicto

Según el Dane, entre 1980 y 2010 se cometieron 652.356 homicidios, de los cuales 364.716 tuvieron lugar en las ciudades. Es decir, más del cincuenta por ciento (Dane, 2010). Es por eso que resulta pertinente preguntarse: si las estadísticas demuestran que la mitad de las muertes violentas fueron en las calles, ¿dónde está la ciudad en los acuerdos de paz? Si analizamos los seis puntos de las negociaciones de La Habana —el plan de desarrollo rural e integral; la participación política; el cese de hostilidades; las drogas ilícitas; la reparación a las víctimas y la implementación y verificación—, la mención y los planes de acción sobre las urbes son nulos. La ciudad ocupa un lugar paradójico en la conciencia pública sobre conflicto y paz: está invisibilizada dentro del universo del conflicto armado. En los medios de comunicación aparece cuando la guerra la asalta y en las políticas públicas este tipo de paz apenas es mencionado (Perea, C. M., 2013).

En Colombia, desde hace diez años la inseguridad en las ciudades se mide de acuerdo con los índices de homicidios, el hurto a personas, a residencias, al comercio, vehículos, motos y tráfico de drogas (Friendrich, E., 2015). Por eso es importante resucitar y reconocer la ciudad en su particularidad mostrando que tiene violencias que no reducen el conflicto (pandillismo, microtráfico, limpieza social) y aportan una gran fracción al territorio nacional, los choques no se dan únicamente en la región.

3.3 Resituación de Bogotá en el conflicto armado:

En Bogotá, las condiciones de desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades son el hilo conductor para que los jóvenes se vinculen con la criminalidad, la drogadicción y la prostitución. Debido a las políticas de seguridad implementadas durante las administraciones de Antanas Mockus (1995-1997; 2001-2003), Enrique Peñalosa (1998-2000), Luis Eduardo Garzón (2004-2007), Samuel Moreno (2008-2011) y, recientemente, Gustavo Petro (2012-2015), la criminalidad se redujo en términos relativos. En 1993, la tasa de homicidios en Bogotá era de 81,2 por cien mil habitantes; en el 2003, la misma tasa había bajado a 23,5 homicidios por cien

mil habitantes; y en el 2012, descendió hasta 16 por cien mil habitantes (Friendrich, E., 2015).

El más reciente informe *Bogotá cómo vamos* muestra que el descenso sigue siendo relevante respecto al año 2012. Sin embargo, resulta preocupante saber que el 17 % de muertes violentas son producto del suicidio, en el que los jóvenes ocupan el 37 % (Bogotá Cómo Vamos, 2016). En cuanto a la violencia intrafamiliar, el 18 % es ejercida contra niños, niñas y adolescentes. Las localidades de Kennedy, Bosa y San Cristóbal son las de mayor densidad, registrando cuatro de cada diez casos asociados con este tipo de maltrato.

En cuanto al hurto, lesiones personales, porte y tráfico de estupefacientes, son los delitos más ejecutados por los jóvenes en Bogotá. Se estima que entre 2016 y 2017, fueron 6.000 los niños y jóvenes capturados en alguna acción delictiva. Así lo revelaron informes auditados por la Secretaría de Gobierno del Distrito, la Policía Metropolitana y dados a conocer por el Concejo Distrital. Las estadísticas oficiales reflejan que el hurto, 53 %; el tráfico y porte de estupefacientes, 22 %, las lesiones personales, 8 %, y los delitos sexuales, 6 %, son las conductas delictivas más frecuentes en la ciudad, cuyos protagonistas son menores de edad. El 11 % corresponde a otras actividades criminales (El Espectador, 2016).

El estudio menciona que las localidades de Kennedy, Suba, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Fontibón y Ciudad Bolívar concentran el mayor número de casos de delincuencia juvenil, los cuales fueron reportados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA. Sin embargo, es preocupante saber que el 25 % de jóvenes que ingresan al SRPA son reincidentes en actividades delictivas por las fallas que presenta el sistema, ya que el 80 % son dejados en libertad (El Espectador, 2016). En Bogotá, durante el 2015, 6.042 jóvenes fueron capturados, la mayoría entre los 14 y 17 años.

3.4 Una mirada a las políticas públicas de la juventud:

Cabe resaltar que hasta 1950, en Colombia las políticas públicas dirigidas a los jóvenes fueron prácticamente nulas. Esta situación coincidió con el contexto del país netamente

rural donde el ámbito político influyó significativamente en cuanto a la filiación de los jóvenes por medidas de su familia o partidistas.

Es decir, el escenario de la juventud colombiana durante este periodo se caracterizó por una rápida inserción al trabajo rural, la pronta toma de responsabilidades familiares y el ejercicio de la guerra, como soldados rasos, sin ellos desearlo, en las guerras civiles, adicional a las tendencias políticas de la época que enfrentaban a liberales y conservadores por la hegemonía en el poder. Eran pocos los que tenían el privilegio de acceder a la educación en los cascos urbanos, sumado a la poca participación de la mujer dentro de la sociedad (Santos Pinzón, L. D., s. f).

De 1950 a 1984 va una etapa que se caracteriza por la caída de grandes instituciones de poder, como la Iglesia Católica y los partidos políticos; y la alta migración del campo a la ciudad por el conflicto armado, lo cual facilitó todo el proceso de modernización y expansión urbana e industrial del país.

Bajo este contexto se origina Coldeportes, en 1968, bajo la administración de Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, no asumió un papel importante frente a la juventud, limitándose a mantener esporádicos compromisos con organizaciones juveniles, pero sin una visión clara de generar efectivos espacios para el desarrollo juvenil (Sarmiento, L., 2003). Ese mismo año se creó el Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, encargado de velar por la protección de los menores y de las familias, y el ya mencionado Idipron, con un modelo pedagógico basado en los principios que atiende las dinámicas de la calle y trabaja por la protección de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud.

En la historia reciente, el país ha tenido avances constitucionales y jurídicos significativos. La Constitución de 1991 reconoce a los jóvenes como sujetos de deberes y derechos. El artículo 45 establece:

El adolescente tiene derecho a la protección y la formación integral. El Estado y la sociedad, garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la educación, protección y progreso de la juventud.

Entre 1992 y 1995 se produjeron dos documentos Conpes, el 173 y el 2794, respectivamente, que estructuraban políticas para ordenar la inversión pública,

favorecer las condiciones de vida de la juventud y estrategias de vinculo a la vida laboral. En 1997 se expide la Ley de Juventud (Ley 375), que pasa a consolidarse como una política de Estado que promueve las siguientes disposiciones: el desarrollo físico, psicológico, social, espiritual, cultural y la garantía de su participación activa en la vida nacional, social, económica y política como ciudadano. Se entendió como joven la persona entre los 14 y 26 años. A partir de este momento se crean las bases legales para la conformación del Sistema Nacional de Juventud, entendido como el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan trabajo con y en pro de los jóvenes (Sarmiento, L., 2003). En el año 2000, el Decreto 089 reglamenta la organización y el funcionamiento de los Consejos de Juventud como espacios de participación juvenil y mecanismos de interlocución, veeduría y construcción concertada de las políticas de juventud. En 2001 inició la convocatoria al Diálogo para una Política Nacional de Juventud “Presente y futuro de los jóvenes”, y en el 2003, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, la ley 812, nació el programa presidencial Colombia Joven, con la tarea diseñar y construir, de manera participativa, una Política Pública nacional de Juventud (Sarmiento, L., 2003).

Actualmente, por medio de Ana Fergusson, exdirectora de Protección del ICBF, la entidad reportó que tienen bajo su cuidado 3.515 menores recuperados de las calles, de los cuales 2.113 son mujeres y 1402 son hombres. El 51 % tenía menos de cinco años y el 56 % estaba entre los 12 y los 17 años: 447 fueron encontrados en Bogotá (El Tiempo, 2016). Estos niños llegan al Instituto generalmente enfermos por consumir alimentos de la basura o pagar comidas que pueden costarles mil pesos, lo que influye en su desarrollo cognitivo. Cuando el ICBF encuentra que son adictos a las drogas, inicia un tratamiento para desintoxicarlos.

En 2017, 72.724 niños y adolescentes fueron educados en temas de sexualidad y reproducción. En materia de desarrollo integral, de educación y acompañamiento psicológico, fueron atendidos 178.382 menores. Además, se logró la desvinculación del trabajo infantil de 18.807 niños y 622 adolescentes, quienes, con la ayuda de los centros de atención, apéndices del distrito, lograron acceder a la educación primaria, básica y secundaria (Bogotá cómo vamos, 2017).

En el primer trimestre del 2018, el Distrito, por medio de la Secretaría Social de Bogotá, rescató 152 indigentes repartidos en los diferentes centros de atención del Idipron, con el propósito de atenderlos para que se puedan bañar, alimentar, educar y reincorporar a la sociedad.

3.5 Sobre la niñez y la juventud y su vínculo con la violencia

La violencia es un fenómeno que históricamente se ha relacionado con condiciones sociales particulares. Explicar su etiología por características individuales de origen biológico o psicológico reduce su esencia. La razón de la violencia hay que encontrarla en el cruce de factores negativos del individuo y de la sociedad (Torres, C., 2005).

Según la Organización Mundial de la salud, OMS, las condiciones de hacinamiento, problemas en la alimentación, la desnutrición, el desempleo y una familia disfuncional fomentan el desarrollo de conductas agresivas. Las diferentes formas de violencia que se producen en la ciudad se producen en escenarios sociales diferentes como la casa, los centros educativos, el barrio o los equipos deportivos.

El grupo más afectado, si cabe el término, está constituido por la población ubicada entre los 15 y los 25 años; sin embargo, viene incrementándose de manera alarmante otro, el formado por aquellos que están entre los 12 y los 15 años. Es decir, el adolescente es el principal actor en cuanto a agente de la violencia y en cuanto a víctima de ella (La Roux, G., 1994).

Es un error centrar la violencia en los jóvenes únicamente en relación con la pobreza, aunque es evidente la exclusión, la falta de oportunidades y marginalidad es un factor determinante. Debemos mencionar factores exógenos como las rupturas familiares, problemas de alcoholismo o drogadicción en su entorno y la segregación social, que empujan a los jóvenes a espacios sociales creados por ellos mismos, como las pandillas callejeras o las barras bravas.

Esos grupos de amigos están formados casi siempre por jóvenes desarraigados, llenos de problemas personales y familiares, que encuentran en el grupo cierta valoración y respeto, solidaridad y lealtad, e, incluso, en determinados casos, protección y apoyo;

además, se les ofrece la posibilidad de ser parte de, de sentirse incorporados a un grupo social, de compartir nuevos valores, representaciones y lenguajes, de manera que terminan reemplazando a la familia y al centro educativo como medios de socialización; para algunos la pandilla es el medio para alcanzar notoriedad y respeto dentro de su medio (Torres, C., 2005).

Los niños y jóvenes se convierten en un fragmento de la población en la que se descargan tensiones y frustraciones acumuladas en la lucha por sobrevivir. El abandono del hogar por menores es proporcional con las rupturas de las estructuras familiares como consecuencia de la violencia doméstica.

Las humillaciones que pueden soportar los niños y los adolescentes debilitan su autoestima, y animan sentimientos vindicativos que alimentan la violencia. Presenciar la violencia intrafamiliar recompensa el comportamiento agresivo y perpetúa su reproducción (Torres, C., 2005).

La familia juega un rol importante en esta cultura de la violencia, pudiendo trabajar alternativamente como reproductora de la cultura de la convivencia.

Johan Galtung define la violencia estructural como aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas: supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de estratificación social; es decir, sin necesidad de formas de violencia directa (La Parra D. y Tortosa, J. M., 2003). El concepto de violencia estructural tiene como determinantes la injusticia social, la pobreza y la desigualdad producto de las políticas de Estado mal estructuradas que conllevan la discriminación institucional, la legislación excluyente de ciertos colectivos o la política fiscal (La Parra D. y Tortosa, J. M., 2003). En este sentido, la infancia y adolescencia son poblaciones vulnerables a la pobreza. Los efectos que pueden tener las crisis socioeconómicas sobre las oportunidades de niños, niñas y adolescentes son muy relevantes e inciden en aspectos esenciales al sostenimiento de la vida, como es el acceso a los alimentos, pero también en el ejercicio de capacidades cruciales para el desarrollo humano, como son el acceso a la atención de la salud y a una educación de calidad (Tuñón, L., 2016.)

En Argentina, desde el año 2010, la Universidad Católica realiza una encuesta estratificada en todas las ciudades para conocer la calidad de vida de los niños y adolescentes. La muestra realizada al núcleo poblacional entre 0 y 17 en 5.700 hogares busca conocer las condiciones en cuanto a la alimentación, salud y hábitat; subsistencia, crianza y socialización; información y trabajo infantil.

El censo demostró que, en cuanto a la estimulación emocional, social e intelectual, se advierte que en el año 2015, entre los 0 y los 12 años, al 43,2 % no le contaban cuentos ni le relataban historias; el 44 % no tenía libros infantiles en su hogar y al 12,8 % no le habían festejado su último cumpleaños. Las secuelas psicológicas a mediano y largo plazo para un niño que sufre un entorno fracturado pueden ser altos: en un hogar con dificultades económicas, desempleo y falta de recursos se viven situaciones de estrés constante. Los niños son esponjas y absorben los gritos, la tensión y los nervios. Eso cala en el interior poco a poco (Focué,2014).Los nervios, estrés, ira y tristeza en el hogar, pueden hacer que los problemas se cronifiquen y deriven en adultos temperamentales y agresivos.

3.6 Periodismo al servicio de las soluciones a esta problemática

Desde hace años existen diversas corrientes periodísticas planteadas en estructurar información realmente útil para la sociedad que leía, escuchaba y veía los medios. Este tipo periodismo quiso responder dicha situación vinculando su audiencia en temas coyunturales, motivándolos a participar en las soluciones, lo que aumentó la credibilidad de los medios y gestionar nuevos públicos (Bernabé, J., 2004).

El periodismo preventivo se enfoca en seis áreas: conflictos armados, crisis institucionales, crisis sociales y humanitarias, crisis de derechos humanos y crisis medioambientales.

Es una disciplina periodística que pretende dotar a la opinión pública nacional e internacional de elementos informativos que sean útiles para comprender el origen, desarrollo y finalización de situaciones clave (crisis y conflictos), destacando los esfuerzos para su resolución y haciendo visibles aspectos que permitan la prevención de situaciones similares en un momento posterior, a partir de la información realizada antes, durante y después del acontecimiento (Bernabé, J., 2004).

El objetivo de esta modalidad es construir una noticia más contextualizada, partiendo desde su origen, describiendo a todos los actores involucrados en el desarrollo de la problemática y repercusiones finales.

Otra referencia del periodismo preventivo es el enfoque para la paz o propaz, considerado como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan respeto a la vida, al ser humano, el rechazo a la violencia en todas sus formas, teniendo en cuenta principios de libertad, justicia y tolerancia, así como la comprensión de los pueblos y las personas al momento de presentar algún producto. En palabras originales, consiste en

Anticiparse a los acontecimientos que pudieran desembocar en un conflicto armado, crisis institucional, crisis social, crisis humanitaria, crisis de derechos humanos y/o crisis medioambiental, difundiendo las claves para que lectores, oyentes y/o televidentes comprendan los motivos que pueden desencadenar dichas situaciones.

El periodismo propaz referencia instituciones, organizaciones o personas naturales dedicadas a solucionar este tipo de conflictos por medio de alguna iniciativa.

4. Productos periodísticos:

Con fundamento en las consideraciones teóricas y en el contexto referencial descritos, se expondrá cómo influye la violencia estructural, la violencia urbana y la desigualdad en la formación personal de los niños y jóvenes, a través de los siguientes productos periodísticos:

- **Informe especial:** *El conflicto armado también está en los barrios*. Recuento de la violencia colombiana y su impacto en la ciudad.
- **Crónica 2:** *“La firma del acuerdo de paz no es revolución y mucho menos impunidad por decreto”*. Historia de vida de un excombatiente.
- **Crónica 3:** Historia de vida de un expandillero.
- **Crónica 4:** *Ciudad Bolívar pinta con su gente un nuevo futuro*. Relato de barrio.

El conflicto armado también está en los barrios

*En Bogotá hay alrededor de 1.320 pandillas.
El 70 % de los asesinatos son cometidos por
personas entre los 17 y 34 años*

Colombia es una palabra que deriva del apellido de Cristóbal Colón, que en su original italiano es Cristóforo Colombo, apellido que proviene del latín colomus y columba que significa “paloma y palomo”, símbolo de la paz en la cultura judeo-cristiana. Tenemos entonces un país que lleva cerca de un siglo sufriendo los flagelos de la violencia aunque su nombre deriva de evocar la simbología de la paz en latín. Los orígenes y el crecimiento del conflicto armado en Colombia son heterogéneos y extensos, tanto en el tiempo como el territorio nacional, también lo han sido sus actores, víctimas y repertorios violentos, que responden a la fragmentación institucional y territorial del Estado, el problema agrario y la limitación en la participación política.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), dependencia estatal que recupera, conserva, compila y analiza material documental sobre el conflicto armado interno, entre 1958 y el 2018, la guerra en Colombia dejó 262.179 muertos: 215.005 son civiles y 46.813 combatientes, equivalentes a la misma población de Sincelejo, Sucre. Asimismo, un total de 94.754 muertes son atribuidas a grupos paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a los agentes de Estado. Para clasificar esta información el CNMH recurrió a 592 fuentes sociales e institucionales y cerca de 10.263 documentos y bases de datos.

Para Andrés Suárez, coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, esta documentación puede responder a varias preguntas. «Tenemos que reconocernos todos para entender el conjunto de la guerra. La fragmentación confunde, distorsiona la verdad. A la fragmentación hay que anteponer la compactación, juntar todas las

piezas, como nosotros lo hicimos». Las cifras son expuestas por textos como el informe *¡Basta ya!* que divide en cuatro periodos el conflicto armado en Colombia:

- **1958 - 1982:** Violencia bipartidista, proliferación de las guerrillas y auge de la movilización social
- **1982 - 1996:** Proyección política, expansión territorial y crecimiento de las guerrillas; grupos paramilitares, propagación del narcotráfico y procesos de paz.
- **1996 - 2005:** Recrudescimiento del conflicto armado, crisis y recomposición del Estado y solución militar al conflicto armado.
- **2005 - 2012:** Grado de eficiencia en acciones militares, fracaso en la negociación política con grupos paramilitares y acomodo y rearme de estructuras fragmentadas.

La violencia bipartidista es política, producto de las viejas disputas que ocasionaron desplazamientos, asesinatos, despojo de bienes, crímenes sexuales y guerras internas, Estas fueron las característica del periodo bautizado por los historiadores como «La Violencia», comprendido entre 1946 y 1958, cuando liberales, apoyados por movimientos agrarios, obreros y populares; y los conservadores, unidos a las fuerzas militares y el apoyo de la Iglesia Católica con un discurso anticomunista, recurrieron a la fuerza acciones violentas para lograr el dominio del Estado.

«Las tensiones políticas motivaron la creación de grupos armados. La policía chulavita y los pájaros, por parte de los conservadores. Del otro lado, las Guerrillas Liberales y las autodefensas comunistas», explica Alberto Gómez, filósofo e investigador del Instituto de Estudios Socio-Históricos de la Universidad Santo Tomás, y hace énfasis en los actos violentos con los que castigaban al adversario: el descuartizamiento, exhibiciones de cabezas cortadas y partes de cuerpos en caminos rurales. Así lo explica la antropóloga María Victoria Uribe en su libro *Antropología de la Inhumanidad: ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia*: «Esta guerra dejó un saldo de más de 200 mil muertos, una enorme cantidad de mujeres violadas y niños huérfanos».

El informe *¡Basta ya!* rescata un estudio de la Secretaría de Agricultura del Tolima, en 1959, el cual muestra que entre 1949 y 1957 el departamento registró 16.219 víctimas,

321.621 exiliadas, el 46 % de las tierras abandonadas y 34.304 casas quemadas, producto de la tierra arrasada hoy conocido como desplazamiento forzado.

La magnitud de la violencia bipartidista en el país cuenta con diferentes cálculos sobre asesinatos y despojos de tierras. El analista Paul Oquist, en su libro *Violencia, conflicto y política en Colombia*, presenta los siguientes datos: entre 1948 y 1966 hubo 193.017 personas muertas en la guerra bipartidista; los departamentos más afectados fueron el antiguo Caldas, Tolima, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca.

En cuanto al despojo de tierras, el estudio de Oquist calculó que 393.648 personas perdieron sus tierras y los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander y el antiguo Caldas.

De autodefensas a guerrillas revolucionarias:

El ascenso de Gustavo Rojas Pinilla al poder y los grandes índices de violencia y enfrentamientos políticos radicales llevaron a la creación del Frente Nacional, pacto por el cual los líderes de los partidos Conservador, Laureano Gómez; y Liberal, Alberto Lleras Camargo, acordaron como sistema de gobierno, durante los siguientes dieciséis años (1958 -1974), alternar cada cuatro años el poder presidencial entre un gobernante liberal y uno conservador.

Para Miguel Silva Moyano, politólogo y magister en Seguridad y Defensa Nacionales, de la Escuela Superior de Guerra, la conformación de las guerrillas se debe a «Los intentos del ejército para recuperar militarmente las repúblicas independientes, la limitada capacidad del Frente Nacional para insertar grupos al margen del bipartidismo y la poca capacidad de desactivar la relación entre caciques con grupos armados», asegura.

Análisis que comparte Alberto Gómez: «El pacto de las cúpulas bipartidistas no logró superar las rivalidades entre regiones, municipios y veredas, ni las relaciones de líderes políticos con las guerrillas de sus partidos». El propósito de eliminar los grupos guerrilleros ocupó el primer lugar de la agenda pública mientras que las reformas económicas y políticas pasaron a segundo plano: «El problema agrario, el tema alrededor del conflicto de la tierra, del acceso y la distribución por la tierra

históricamente ha atravesado todo el conflicto armado y las violencias en Colombia», explica Andrés Suárez, del CDMH.

El tema agrario, junto con la represión militar, sirvió como argumento para la formación de ejércitos rurales y urbanos, que, sumados al éxito de la Revolución Cubana y la Revolución China, buscaban imponer un modelo socialista en el país. De hecho, el programa agrario de las Farc, en 1964, plantea quitar la tierra a los terratenientes y devolverla a los campesinos: «A la reforma agraria de mentiras, de la burguesía, queremos contraponer una efectiva reforma agraria revolucionaria que cambie de raíz la estructura socio-económica del campo colombiano, entregando en forma enteramente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador», como lo explica Erich Saumeth, especialista en políticas de seguridad, en su libro *La Historia de la guerrilla en Colombia*. La creación de las guerrillas responde a dos factores: la violencia política y la desigualdad social.

En este contexto y sumado el ataque a Marquetalia, en mayo de 1964, considerado por las Farc como una agresión del Estado contra la población campesina, adelantó su tránsito de autodefensa a organización guerrillera. Paralelamente a la fundación de las Farc, surgieron el Ejército de Liberación Nacional , ELN, en 1962; y el Ejército Popular de Liberación, EPL, en 1967, que, según el informe *¡Basta ya!*, sus orígenes se remiten «al encuentro entre los jóvenes habitantes de las ciudades formados y radicalizados según los lineamientos de las revoluciones cubana y china, y los herederos de las antiguas guerrillas gaitanistas del Magdalena medio, el alto Sinú y el valle del río San Jorge y otros descontentos con las restricciones de participación política en el Frente Nacional».

Gobierno Nacional y las Farc tras la paloma de la paz

Aunque Colombia no ha logrado una paz completa, tiene experiencia en la negociación y desmovilización de grupos subversivos. Como antecedentes, podemos tener presente el surgimiento de la Unión Patriótica, cuando el Movimiento Autodefensas Obreras, los frentes Simón Bolívar y Antonio Nariño, del ELN; y algunos miembros de las Farc

dejaron las armas en 1985. El 9 de marzo de 1990 se firmó el acuerdo de paz con el M19; y el 15 de marzo de 1991, con la desmovilización del EPL, bajo los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria.

Con las Farc, según la Fundación Paz y Reconciliación, se negoció en cuatro ocasiones. Primero, en 1982, bajo el gobierno de Belisario Betancourt, con la firma del acuerdo de La Uribe se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las Farc y el Gobierno Nacional sobre la idea de una reestructuración y modernización de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y la constitución de garantías para ejercer la actividad política. En 1992 lo impulsó César Gaviria e instaló mesas de negociaciones en Tlaxcala, México, donde se hace pública la intención de otras insurgencias adscritas a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, como el ELN, las Farc y el EPL de dialogar con el gobierno. Estos procesos terminan el 4 de mayo de 1992 con resultados diferentes para cada grupo armado. En 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana se ordena la desmilitarización de cinco municipios conocidos en la época como zona de distensión. Después de tres años el proceso llegó a su fin en el 2002. Finalmente, en el 2016, se firma el acuerdo del Teatro Colón, después de cuatro años negociación del Gobierno Nacional con las Farc, durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

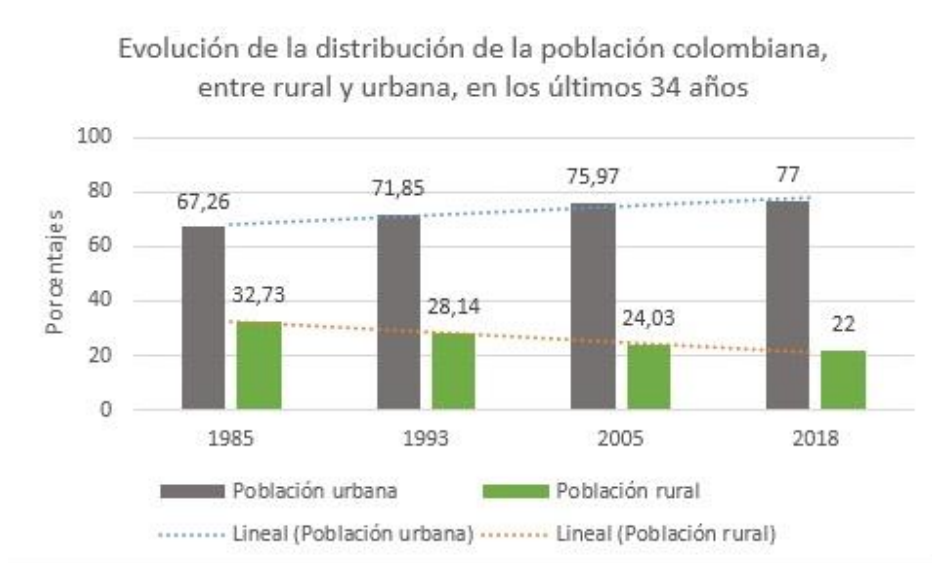
Después de cinco décadas de conflicto armado y diferentes actores inmersos en el conflicto, de los 1.102 municipios que tiene Colombia 334 son los más afectados según la lista de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto, Zomac, siendo los departamentos de Antioquia (con 55), Nariño (con 23), Cauca (con 22), Tolima (con 21), Meta (con 20) y Norte de Santander (con 12) los de mayor número.

¿Dónde está la ciudad?

El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, la Corporación Región y el Observatorio Social de Cali investigaron las causas y consecuencias de la violencia en Medellín, Cali y Bogotá y su conexión con el conflicto armado. Identificaron el narcotráfico, la guerra de los carteles, el paramilitarismo, las milicias urbanas y los campamentos de paz establecidos en las ciudades durante la desmovilización de varios grupos las principales razones.

A partir de estadísticas del Dane, el informe arroja que entre 1980 y 2010 se cometieron 652.356 asesinatos en Colombia de los cuales 364.716, el 56%, tuvieron lugar en la ciudad. «Las urbes están invisibilizadas en el universo del conflicto armado: en la reflexión académica no llega ni al estatuto de capítulo autónomo digno de mención independiente, en los medios de comunicación aparece sólo cuando la guerra la asalta y en las políticas públicas hacia la paz apenas si se menciona», dice el informe. Sin embargo, no se puede soslayar que la proporción mayor de las poblaciones están concentradas en las ciudades.

En el censo de 1985 el Dane subrayó que éramos 27.871.354 colombianos; 18.746.955, residían en áreas urbanas y municipales, el resto de la población; 9.124.354, se repartían en centros poblados y corregimientos municipales. En 1993 pasamos a ser 33.109.840 millones de colombianos; 23.792.476 establecidos en las ciudades y municipios mientras que en corregimientos y caseríos éramos 9.317.364. Ahora, en el 2005 llegamos subimos a 41.468.387 en el país; 31.503.977, en áreas urbanas y municipales; 9.964.420 en centros poblados y corregimientos municipales. El censo poblacional del 2018 mostró que los colombianos siguen ubicados más en los municipios. Las proporciones están repartidas de la siguiente manera: El 78 % en cabeceras municipales, 15 % rural disperso y el 7% en centros poblados.



Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Dane

Miguel Silva Moyano sostiene que la violencia urbana responde a dos factores particulares: «El primero fue la crisis en Cali y Medellín, cuando los carteles emplearon sicarios, elevando la inseguridad a niveles insospechados, generando narcotráfico, sicariato y combos de barrio». Otro elemento que destaca es la invasión paramilitar en las ciudades: «En 1999, Carlos Castaño emprendió sus fuerzas a la toma de las ciudades y penetró en varias de ellas. Llegaron a los barrios populares para controlar las rentas ilegales, extorsionaron los negocios locales y administraron la violencia», como lo resalta el estudio *Los grupos paramilitares en Bogotá y Cundinamarca, 1997-2005*, de la Universidad del Rosario, donde puntualiza algunos negocios del paramilitarismo para enriquecerse en las ciudades, como el dominio en zonas como Corabastos y los sanadresitos, las casas de empeño, apuestas y prestamistas.

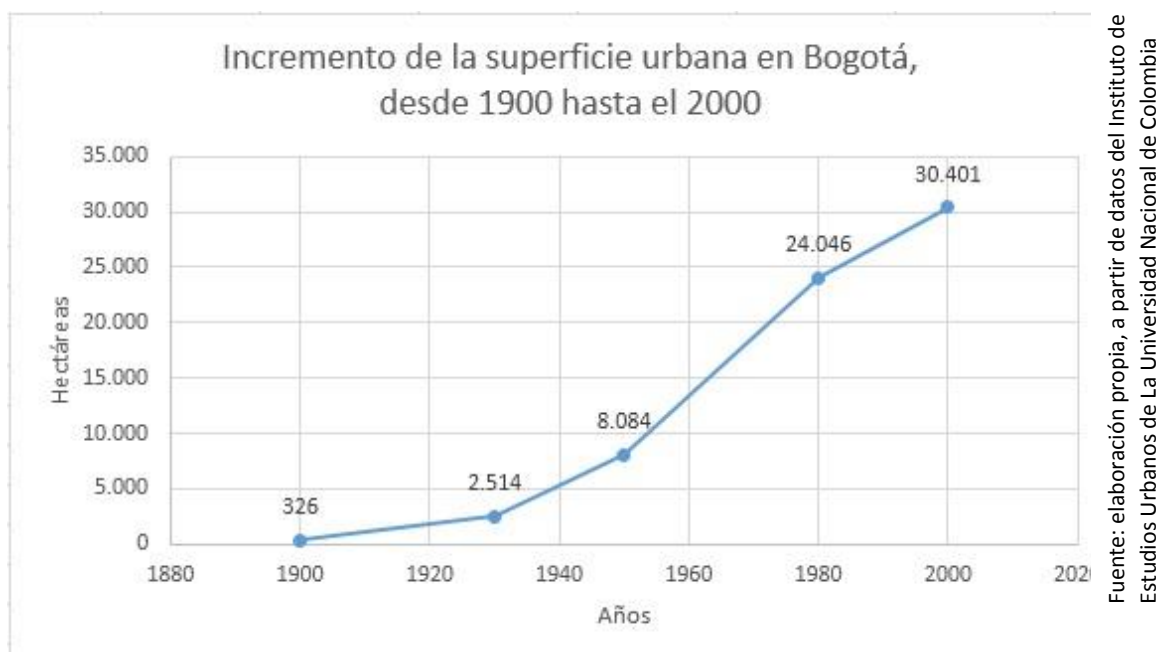
Frente a los campamentos urbanos instalados en las ciudades durante la desmovilización de grupos armados, como el M-19 y el EPL, varios artículos y columnas de opinión mostraron su preocupación por la transición que el conflicto estaba teniendo del campo a la ciudad. Una columna de opinión de 1985, escrita por Lucy Nieto de Samper para *El Tiempo*, manifestaba que «La guerra de guerrillas ya la tenemos aquí, en el casco urbano»; ese mismo año, la revista *Semana* publicó un artículo titulado «La guerra llega a los barrios», donde cuenta cómo era la instalación de estos campamentos en Bogotá, «En barrios miserables del suroriente, abandonado de Dios, del acueducto, de los políticos tradicionales e inclusive de la Policía». Este mismo artículo hace referencia a la participación de células urbanas del ELN en actos delictivos en Bogotá, Chía, Bosa y valle de Ubaté.

Frente a la inseguridad y las violencia urbanas, el informe *Seguridad, Policía y desigualdad: encuesta de ciudadanía en Bogotá Cali y Medellín*, hecho en el 2014 por Dejusticia, detectó que las políticas de seguridad varían según el estrato y las mujeres, los afros e indígenas tienen los peores niveles de confianza hacia la Policía y demás autoridades al sentirse más vulnerables de crímenes violentos.

Bogotá, desigualdad, desplazamiento y delincuencia

El crecimiento urbanístico de la ciudad durante el siglo XX fue impresionante, así lo revelan las cifras del Instituto de Estudio Urbanos de la Universidad Nacional:

- En el año 1900 la superficie urbana fue de 326 hectáreas.
- Para 1938 la ciudad alcanzó las 2.514 hectáreas
- Durante la época de La Violencia (1946 y 1958) alcanzó las 8.084 hectáreas
- Para la década de los 70 y 80, la ciudad pasó de 13.985 a 24.046 hectáreas
- Para el año 2000 llegó a las 30.401 hectáreas.



La concentración de las industrias en Bogotá, mayores oportunidades laborales, los desplazamientos producto de la violencia bipartidista, la agricultura y la oferta de tierras para urbanizar, hicieron que Bogotá pasara en menos de un siglo de cien mil a dos millones de habitantes, tal como lo expone el antropólogo Marco Forero en su libro *Una breve historia sobre Bogotá*: «en el año 1918, Bogotá llegó a los 145.000 habitantes, para 1928 se alcanzaron las 240.000 personas, en 1964 había un millón 700 mil habitantes; y para 1973 se calcularon 2.855 mil». Bogotá extendió sus tentáculos tan

rápidamente que los servicios básicos como el agua, el transporte y la luz, estuvieron un paso atrás de la construcción de nuevos barrios, así que en la actualidad la red de servicios públicos no llega a algunos sectores.

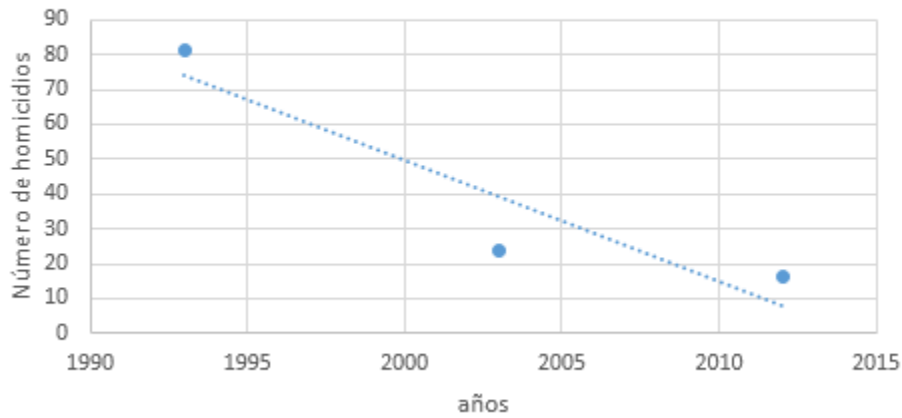
En cuanto a los desplazamientos, en Bogotá residen el 4 % de los 8,6 millones de personas víctimas del conflicto armado, es decir 352.873 personas, según la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá.

El 31 % de la población es menor de 18 años y el 35 % oscila entre los 18 y 28 años. Sobre el género, se advierte que el 51% son mujeres, el 48% hombres y el 1% son parte de la población LGTBI. Además, el 60 % de las víctimas viven en las siguientes localidades de Ciudad Bolívar (31.244), Bosa (27.966), Kennedy (26.486), Suba (17.118) y San Cristóbal (13.317) zonas donde el 60 % de la ciudadanía manifestó sentirse inseguro en la ciudad, según el más reciente informe de *Bogotá cómo vamos*.

De las víctimas, 9.552 personas presenta alguna discapacidad, 1.001 son niños, niñas y adolescentes, 2.560 son adultos mayores.

En Bogotá, las condiciones de desigualdad, la exclusión social y las faltas de oportunidades son el hilo conductor para que los jóvenes se vinculen con la criminalidad, la drogadicción y la prostitución. La Fundación Friedrich Ebert Fescol, en su libro *Violencia urbana y gestión de la seguridad en Bogotá*, destacó que en 1993 la tasa de homicidios en Bogotá era de 81,2 por cien mil habitantes; en el 2003, la misma tasa había bajado a 23,5 homicidios por cien mil habitantes, y en el 2012 descendió hasta 16 por cien mil habitantes. El documento arrojó que Bogotá tiene aproximadamente 1.320 pandillas y cerca del 70% de los homicidios de la ciudad son cometidos por población que oscilaba entre los 17 y los 32 años de edad, también la mayoría de las capturas por delitos menores se concentraba también en esta misma población. Sin embargo, gracias a las políticas de seguridad implementadas durante las administraciones de Antanas Mockus (1995-1997; 2001-2003), Enrique Peñalosa (1998-2000), Luis Eduardo Garzón (2004-2007), Samuel Moreno (2008-2011) y, recientemente, Gustavo Petro (2012-2015), la criminalidad se redujo.

Homicidios en Bogotá por cada 100 mil habitantes desde 1993 hasta 2012



Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Fundación Friedrich Ebert Fescol

En cuanto al hurto, las lesiones personales, el porte y el tráfico de estupefacientes, son los delitos más ejecutados por los jóvenes en Bogotá. Se estima que entre 2016 y 2017, fueron 6.000 los niños y jóvenes capturados en alguna acción delictiva. Así lo revelaron informes auditados por la Secretaría de Gobierno del Distrito, la Policía Metropolitana y dados a conocer por el Concejo de la ciudad. Las estadísticas oficiales reflejan que el hurto, 53 %; el tráfico y porte de estupefacientes, 22 %, las lesiones personales, 8 %, y los delitos sexuales, 6 %, son las conductas delictivas más frecuentes en la ciudad, cuyos protagonistas son menores de edad. El 11% restante responde a otras actividades criminales.

«La firma del acuerdo de paz no es revolución mucho menos impunidad por decreto»

*Detrás de cada excombatiente hay un colombiano.
Son cerca de 13.000 los desmovilizados de las Farc
sometidos a la justicia transicional con la intención
de reincorporarse a la vida civil.*

Gregory no es ni muy alto ni muy bajo, tiene cuarenta años, es rolo de nacimiento pero la mayor parte de su infancia transitó entre el campo y la ciudad, fundamentalmente en San Juan de Rioseco, municipio del Tequendama cundinamarqués, el cual define como un tesoro escondido custodiado por el cerro de Peñas Blancas, que con su color esmeralda parece ser el guardián de todo mal y peligro; descansa sobre las riberas occidentales del río Magdalena, que se complementan con los maravillosos nevados del Tolima y el Ruiz, divisibles con el cielo despejado.

Su padre, licenciado en ciencias sociales, hombre dogmático y sagaz mentalmente, tuvo la tarea de conformar las listas de los departamentos de Cundinamarca y Tolima para las elecciones al Congreso, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales en representación de la Unión Patriótica en las elecciones de 1986. Este partido fue un experimento que nació como resultado del proceso de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y frentes desmovilizados de las guerrillas del ELN, el M-19 y las Farc, para ir ambientando la llegada a la arena política de las guerrillas, sindicalistas, comunistas y personas afines al ideario de izquierda. De su padre heredó su doctrina política y el perfeccionismo con el lenguaje, pues lo acompañaba en sus recorridos por la región donde el pasatiempo principal eran las conversaciones sobre el uso correcto de las palabras y de los signos de puntuación.

Con voz firme y actitud severa cuenta que es sobreviviente del proceso sistemático de asesinatos y exterminio de la Unión Patriótica. A su papá le hicieron dos atentados, pero salió ileso. No lo pudieron matar. Tuvo que salir corriendo, esconderse por un tiempo, y Gregory, junto a su mamá y sus hermanos, vivir con la zozobra de no saber si su papá estaba vivo. Todavía recuerda aquellos años cuando dos camperos se estacionaban frente a su casa en busca de su padre.

Cuenta que estuvo una vez en prisión, fue a los ocho años, cuando con su familia asistió a un acto político de la Unión Patriótica en San Juan de Rioseco. El comandante de la Policía, incómodo con la reunión, irrumpió violentamente ordenando a sus efectivos llevar a todos los asistentes, incluidos bebés, niños y niñas, a la cárcel del pueblo. Allí permanecieron encarcelados por más de 24 horas, pudo ser más tiempo; pero el cura del municipio intercedió por las familias y las autoridades no tuvieron más remedio que dejarlos libres.

En medio del genocidio de la Unión Patriótica y la incertidumbre de no saber sobre su padre, como hijo mayor tomó las riendas de la casa a los once años. Junto con su madre y sus tres hermanos se fueron a vivir al barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá. Les tocó vivir en un espacio de cuarenta manzanas con unos vecindarios nada envidiables: por el norte, inquilinatos y ollas del microtráfico; por el sur, los cementerios; por el oriente, burdeles, almacenes de muebles y residencias para pasar el ratito; por el occidente, talleres de mecánica y algún bar de *strep tease* camuflado.

Estudió en colegio público y se graduó del Instituto Distrital San Mateo. Fue reclutado por el ejército y prestó el servicio en el Batallón Guardia Presidencial. Al salir, se inscribió para estudiar ciencias políticas en la Universidad Nacional y pasó. Allí ingresó a las Juventudes Comunistas de Colombia y, junto con varios camaradas, durante el proceso de paz del Caguán, en la presidencia de Andrés Pastrana, convencidos de forzar los cambios democráticos que esperaban y en busca del bienestar del pueblo colombiano, ingresaron a la Red Urbana Antonio Nariño, comandada por Carlos Antonio Lozada, unidad que centraba su actividad guerrillera en la ciudad de Bogotá, donde combinaban la pedagogía y la utilización de las armas como los medios más apropiados para lograr la revolución. Gregory explica que la diferencia entre un bloque

rural y uno urbano no es mucha, dice que se basan en los mismos principios: llegar al poder por medio de la insurgencia. La estructura del frente tiene un líder que conforma una dirección con una subdirección y tres hombres que controlan los llamados comités de zona, encargados de actividades militares, de salud y de estudio. Sin embargo, la diferencia radica en la aplicación de trabajos clandestinos y la mayor hostilidad en la ciudad, donde el contacto con el enemigo es constante.

Se fue a vivir al Sumapaz, localidad rural de Bogotá en el extremo sur del casco urbano, donde ingresó a la escuela básica de las Farc y recibió adoctrinamiento político e ideológico, pues el grupo guerrillero consideraba primordial formar primero la cabeza y luego el brazo. Citando un argumento de su comandante, Carlos Antonio Lozada, afirma que cuando una organización no sigue esta línea es proclive a desaparecer en cualquier momento.

Para Gregory, la principal diferencia entre un grupo castrense y uno insurgente es la disciplina, también considera que los castigos utilizados por el ejército vulneran la dignidad humana. Además, lamenta el hecho de que muchos de sus integrantes ingresen por obligación y no por convicción. Otros, al ser la única opción de vida que se les presenta. Van a rifar su vida en un conflicto, a diferencia de los movimientos revolucionarios, que dan las bases teóricas de por qué se lucha y por qué se carga el fusil.

De las más de 262 mil víctimas que dejó el conflicto armado en Colombia, a Gregory la guerra le arrebató dos grandes partes de su corazón. Primero, su hermano Antonio, llamado así en alusión a Antonio Gramsci, filósofo, teórico marxista, político y periodista italiano fundador del Partido Comunista Italiano y contradictor de Benito Mussolini. Antonio, el hermano de Gregory, un joven introvertido, tímido, pero de gran capacidad intelectual, siguió un camino similar al de Gregory. Después de graduarse del Colegio, ingresó a la Universidad Distrital para estudiar educación y pedagogía, durante el 2002, motivado por su hermano, compartiendo los mismos ideales y bases teóricas, dejó la Universidad, tomó un fusil y cambió la selva de cemento por el páramo del Sumapaz. Un año duró en el frente Antonio Nariño, pues durante una actividad política organizada en Santa Librada, cayó en combate. Antonio tenía que custodiar a José Marbel Zamora,

alias «Chucho», mano derecha del Mono Jojoy y excabecilla de la red urbana. Fueron emboscados, alias «Chucho» escapó, pero Antonio fue neutralizado con tres tiros de gracia dos en la cabeza y uno en el pecho. Tenía 21 años.

La segunda parte del corazón fue Andrea, amistad que nació en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, donde ella estudiaba sociología, veían algunas clases juntos e ingresaron en el mismo año a las Juventudes Comunistas de Colombia. Con ella tenía largas conversaciones sobre música, política y cultura. Al mismo tiempo decidieron cambiar las aulas de clase por los campamentos, las Juventudes Comunistas de Colombia por la Red Urbana Antonio Nariño y la palabra amistad por camarada. Sin embargo, durante una acción clandestina en San Bernardo, del cual Gergory no da mayores detalles, Andrea fue asesinada por el Ejército durante un operativo del que él se salvó de milagro, pues cuando escuchó las ráfagas se encontraba a 300 metros de distancia.

El compromiso de Gregory con las Farc aumentó tras las muertes de Antonio y Andrea. En ese entonces nunca pensó en desmovilizarse, es más, en su cabeza estuvo fija por mucho tiempo la palabra venganza, pues con rabia cuestiona el accionar del Ejército de esta época, que no acataba las normas del Derecho Internacional Humanitario sobre el respeto de la vida cuando un combatiente ha sido rendido en combate. Cuenta que las Fuerzas Armadas tenían la orden arrasar y neutralizar al adversario.

Las Farc estuvieron cerca de tomarse Bogotá: en el 2003, las provincias de Oriente, Gualivá, Rionegro y Sumapaz estaban dominadas por la guerrilla. Fue entonces cuando en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe se lanzaron los operativos Libertad I y Libertad II. Al menos diez mil hombres del Ejército participaron en la ofensiva por tierra y aire que permitió la desmantelación total de tres frentes de las Farc en el departamento de Cundinamarca: el 22, el Policarpa Salavarrieta y el 54. La operación también debilitó los frentes Antonio Nariño, el 53, el 55 y el 56. Datos de las autoridades colombianas informan que más de seiscientos miembros de las Farc fueron dados de baja, capturados o tomaron la determinación de desmovilizarse. Además se incautaron de seis toneladas de explosivos y numerosas armas, equipos de comunicaciones, municiones y material de intendencia. A Gregory esta operación le enseñó que la guerra

es como una bicicleta estática: por más rápido que la persona vaya, se esfuerce y sin importar la cantidad de kilómetros que recorra, el paisaje a los dos costados seguirá siendo mismo. Entendió que el conflicto armado requiere de cambios estructurales. Sin embargo, la determinación de desmovilizarse vendría once años después de su última etapa en las Farc como militante del frente 33, que comandaba Sandra Ramírez, excompañera sentimental del legendario guerrillero Manuel Marulanda, alias «Tirofijo», en Norte de Santander, y desde allí coordinó el contenido de la emisora Voz de la Resistencia.

El paso definitivo lo dio en agosto del 2012, después de que el Gobierno de Juan Manuel Santos finalizara la fase exploratoria, en La Habana, donde se aprobó la agenda de negociación que sería el primer eslabón que tenía como propósito terminar con la guerrilla más antigua del mundo, cinco décadas de conflicto armado. En Cuba, y durante cuatro años, hizo parte del equipo de Victoria Sandino, Sandra Ramírez y Camila Cienfuegos, que, si bien no fueron negociadoras de la mesa principal, participaron en actividades logísticas, de prensa y comunicaciones y en la comisión de género, donde Gregory las apoyó. También presenció el momento histórico cuando Santos y Timochenko firmaron las bases del acuerdo sobre la justicia transicional, bajo la mirada de Raúl Castro.

Ante las seis objeciones del Gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la persecución y asesinato a miembros de las Farc y líderes sociales, sumado a los problemas en la implementación del acuerdo de paz —como problemas en la reincorporación, improvisación en la solución de cultivos ilícitos, la poca legitimidad de la JEP, la lentitud con que avanza la reforma rural integral y el reducido apoyo político que recibió las Farc en las elecciones parlamentarias del 2018—, Gregory dice que esta incertidumbre y desconfianza puede hacer que aumenten los desertores del acuerdo. Argumento relacionado con el más reciente informe de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, que encuestó a los excombatientes de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ubicados en 13 departamentos. El estudio mostró que el 76 % de los exguerrilleros es optimista con el

proceso de reincorporación mientras que el 24 % de esta población no augura un buen final.

Gregory cuenta que en Bogotá hay cuatro centros donde los desmovilizados pueden recibir atención. Sin embargo, lamenta que el Distrito no tenga dedicado un plan exclusivamente para atender a los cerca de cinco mil excombatientes radicados en la ciudad en las localidades Ciudad Bolívar, Kennedy , Bosa , Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba y Fontibón, según la ARN. Gregory no sabe si algún excompañero hace parte hoy de las disidencias de las Farc. Sin embargo, reconoce que es un problema el aumento de las disidencias, pues según la Fundación Ideas para la Paz, FIP, hay cerca de 1.200 disidentes, cifra que podría aumentar a 1.500. Al no tener otra alternativa, estas personas podrían pasar a ser parte de las estructuras criminales dedicadas al microtráfico, sicariato, fleteo, de grupos mafiosos de esmeralderos o contrabandistas. Gregory también reconoce que se pueden vincular a las milicias urbanas del ELN o estar detrás de atentados perpetrados en la ciudad como el ocurrido contra la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía, que dejó veintiún muertos y más de sesenta heridos; el petardo que estalló en un baño del Centro Comercial Andino y el petardo de la Plaza de Toros de la Macarena. Todas estas actividades con la intención de perturbar la seguridad de la ciudad, dilatar el proceso de paz que adelantaba el grupo guerrillero con el Gobierno Nacional y enriquecerse por medio de actividades delictivas.

En Cuba conoció a Mayerli, también ex combatiente de las Farc, con quien trabajó en la delegación de comunicaciones durante la negociación en La Habana. Iniciaron una relación que ya cumple siete años, con la firma del acuerdo de paz, en el Teatro Colón. Formalizaron su relación, tienen una hija de 18 meses y hoy viven en un barrio al occidente de Bogotá. Los dos están dispuestos a contar la verdad y someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Gregory, después de veintidós años en las Farc, considera que las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y, sobre todo, entiende que el perdón tiene doble efecto: libera a quien es perdonado y libera al que perdona.

El cuadrilátero fue una selva de cemento

La carencia de afecto, el abandono y el maltrato intrafamiliar lleva muchos jóvenes a refugiarse en el alcohol, en la drogadicción o a entrar en las pandillas.

La Fundación Friedrich Ebert Fescol en su libro Violencia urbana, Gestión de la Seguridad en Bogotá, dice que en la ciudad hay cerca de 1.320 pandillas.

Esta es la historia de Aldemar.

La bofetada fue tan fuerte que el adversario a duras penas pudo mantenerse tambaleante en sus pies sin recostar su cuerpo sobre las cuerdas. Al otro costado, con la agilidad que únicamente poseen los pugilistas, un orangután de brazos largos y piernas pequeñas mantenía sus muñecas firmes, la izquierda para proteger su rostro y la derecha en guardia para responder los contrataques de su contrincante, por si resucitaba antes de los diez segundos y siguieran siendo enemigos por los próximos asaltos.

Al unísono, desde sus sillas, con la emoción, adrenalina y atmosfera que caracterizan los eventos deportivos, los presentes en el coliseo gritaban: «¡diez, nueve, ocho, siete, seis...!»». Los pómulos de Aldemar, magullados por los golpes, apenas dejaban ver la expresión de sus ojos mientras los reflectores brillaban sobre el sudor de su espalda, siguiendo su recorrido en semicírculos por el cuadrilátero.

Después de nueve rounds y quince minutos de combate el conteo seguía: «... cinco, cuatro, tres, dos, uno!, ¡tin, tin, tin!»». El sonido de la campana fue opacado por la ovación de sus familiares, amigos, y desconocidos que presenciaban cómo, después de veintitrés años de problemas en las calles, con el alcohol, la adicción a las drogas, la delincuencia y el pandillismo, sobre sus hombros golpeados, extenuados y temblorosos levantaba el título que lo acreditaba como campeón distrital de peso ligero.

Hubo un tiempo en que cayó en la trampa del dinero y terminó viéndolo como la forma final y justa de medir las cosas. Nació y creció en un barrio al noroccidente de Bogotá, donde la profunda diferencia de clases sociales, entre ricos y pobres, fue y sigue siendo un factor generador de violencia. Suba, localidad de humedales, lagunas y ríos, fue durante la Bogotá de antaño una zona a las afueras de la ciudad donde los hacendados construirían sus fincas y hogares de verano que con el tiempo darían paso a la desigualdad social. Durante los años 30 y 60, la industria, principalmente en la demanda de la construcción y explotación de canteras, llevó mucha gente de municipios de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, dispuesta a trabajar, unos temporalmente y otros permanentemente. Los hombres extraían las piedras, las partían y las almacenaban. Las mujeres se dedicaban a triturarla. La necesidad de trabajadores y de albergarlos llevó a la construcción de campamentos que después se convirtieron en viviendas permanentes.

Cuando la economía centrada en la explotación de canteras y tala de árboles dejó de ser lucrativa, los dueños de las tierras y las haciendas, en compensación de salarios y prestaciones sociales de muchos años, dividieron sus tierras y las repartieron a los trabajadores, pero sin preocuparse por escriturarlas a favor de los nuevos propietarios, muchos establecidos a las afueras de la ciudad, donde no tenían acceso a servicios esenciales, como transporte, acueducto o luz. Este fue un patrón de urbanización generalizado en Bogotá, según lo documenta el Instituto Distrital de Estudios Urbanos.

Los papás de Aldemar llegaron a Bogotá a finales de los años 90, desde Aipe, Huila, dos años antes de que Suba se convirtiera en una localidad. En aquella época todavía había muchos lugares en donde construir su ranchito. Por economía, escogieron un barrio en las periferias y empezaron con un piso, después el segundo, y con el tiempo, un tercero que hoy está arrendado, pues su papá es maestro de construcción, ruso u obrero, en el argot cachaco.

Por mucho tiempo pensó que su casa estaba en un lugar de calles polvorientas, sucias, de callejones estrechos, edificaciones de colores variopintos que consideraba una mierda, cuadras planificadas en semicírculos que a la distancia dan la impresión de que

cada vivienda está encima de otra. Desde el otro extremo de la ciudad, la montaña alumbra y se ve como un pesebre de Navidad.

Así creció Aldemar, en medio de una selva de cemento, de fronteras invisibles y zapatos colgados en los cables de la luz como señal para localizar donde se vendía la droga. Ahí estaba Chita, el chacho de barrio, vendía un gramito de perico del barato, ese que dejaba paralizada la lengua; marihuana regular que adormecía los ojos, aceleraba el corazón y mal viajaba; o el bazuco, una combinación de ladrillo raspado, residuos de cocaína procesada con ácido sulfúrico y queroseno, mezcla de hidrocarburos obtenidos de la destilación del petróleo natural que pone a volar a los pelaos.

También estaba el trago del barato, ese que se conseguía en todas las esquinas, se hacía con cualquier químico pero prendía y armaba la rumba; estaba el Chinchín, Eduardo Tercero, Moscatel, Platero, Niquelón y otros más de nombres rebuscados que costaban entre 3.000 y 5.000 pesos, acompañados de un sobre Frutiño o Tang para armar un coctel artesanal que al tomarlo fuera «más chimba».

Las pandillas no son simplemente grupos de guerreros esquineros conformados por veinte o treinta personas entre los doce y los treinta años, armados, camuflados en la noche, vestidos de ropa ancha con sacos y pantalones marcados con el logotipo de la Warner Bros, cortes exóticos, pelo rapado o diminutos tatuajes con la tinta desgastada por el tiempo que cada uno de los integrantes tiene que llevar en su piel por obligación, cuando, después de varias pruebas de fidelidad, armando tropeles en gavilla, putiando y mirando rayado a quienes se les dé la gana porque sí, vendiendo drogas en las esquinas y parques para ganar una comisión, chalequeando o robando a cuanto incauto-inocente, se atreve a traspasar los límites invisibles de su territorio y borracheras muy bastas acompañadas del porro de marihuana o bazuco, les miden el aceite, son marcados como el ganado y se convierten en propiedad privada del parche, propiedad más que privada personal.

Se convierten en familia y a todos los une su historia, su causa, su razón de ser, principalmente, un resistente cordón umbilical: la carencia de afecto, de amor, de comprensión, al interior del seno familiar, y no es cursilería. El pasado de Aldemar

estuvo opacado por el consumo del alcohol y de las drogas. Desde los trece años comenzaron los problemas que lo obligaron a dejar de un lado la oportunidad de estudiar, pues sus papás trabajaban todo el día, se iban en la madrugada y llegaban en la noche, muy tarde. Las malas amistades y las adicciones fueron las principales razones para perderse en la oscuridad de la calle, fue incitado por gente mayor a malas andanzas, prefería estar armando tropel y en gavilla, porque además pegaba unos traques que dejaban sentado al contrincante. «Bien, pelao, parado, parado, ñero». Peleas sin causa ni razón que le dejaron varias cicatrices en el cuerpo y el tabique desviado. La calle endureció sus nudillos y le enseñó a pegar duro, en aquella época todavía desconocía lo que era un *jap*, *uppercut*, *right hook* y el *stance*, pero la técnica del boxeo vendría para después.

El paso desde la oscuridad de la calle hacia los reflectores del cuadrilátero lo dio en la Unidad Deportiva El Salitre, cuando ingresó a la Liga de Boxeo de Bogotá. Muchos suben a las cuerdas del *ring* para huir de la miseria o del anonimato. En su caso, de las dos. Tuvo que pagar 50.000 pesos para empezar a recibir clases de un profesor con acento caribeño. En un principio los entrenamientos fueron los fines de semana, después los lunes, miércoles y viernes en la tarde, y así, poco a poco, una actividad deportiva le dio un nuevo enfoque a su vida. Desde muy pequeño le gustó pelear y era muy conflictivo, por lo cual, al decidir dedicar gran parte de su tiempo a esta actividad, logró cambiar sus hábitos de consumo dejando de un lado las malas amistades y la calle.

Su primera participación en un torneo fue en un Campeonato Distrital de Boxeo, que enfrentó a cerca de 1.500 deportistas de diferentes clubes y categorías de Bogotá, en el Centro de Desarrollo Comunitario Lourdes, en la localidad de Chapinero. Participó en la categoría de 66 kilogramos masculino. Pero después de doce asaltos, cada uno de tres minutos, y tras recibir varios golpes con los guantes acolchados de nueve onzas sobre su rostro, cayó por nocaut. Sin embargo, aunque perdió la batalla, no la guerra; y con disciplina y mucha perseverancia, se preparó para competir en diciembre y quedar campeón de la Copa Navidad, organizada por la Liga de Boxeo de Bogotá. Desde ese entonces, siguió en un camino laureado de victorias y derrotas hasta ser campeón distrital en la categoría de peso ligero.

La pelea más importante se la ganó a la vida, con ayuda del Distrito estudió un Técnico en Diseño Gráfico mientras entrenaba en la Liga de Boxeo. Ahora es profesor del programa de Boxeo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, donde recibe un sueldo y dicta clases gratuitas a cerca de cuarenta niños de escasos recursos de las veinte localidades de Bogotá. Con el boxeo, Aldemar logró cambiar muchas cosas malas; después de tener esa faceta de deportista, aprendió a tener disciplina, evitó la violencia, las drogas, el alcohol y empezó a ayudar aquellas personas. Los fines de semana hacen un barrido por los parques de Bogotá, acercándose y conversar con los jóvenes que lo necesitan para alejarlos del consumo y que cambien la violencia por el deporte. «También trabajamos con jóvenes de las barras de Millonarios, Santa Fe y Nacional», cuenta el pugilista.

Los reflectores vuelven sobre Aldemar. Esta vez intenta conectar unos *japs* con su brazo izquierdo que no logra impactar sobre la humanidad del adversario. Hay intento de *right hook* sobre el orangután de brazos largos y piernas pequeñas que logra esquivar, pero antes de recobrar el equilibrio, el rival contraataca y conecta fuerte un *uppercut* que lo arroja sobre las cuerdas y de las cuerdas al piso. Mareado, con los ojos hinchados y entreabiertos, con su tórax sudoroso y con hematomas, hubo un momento en que quiso tirar la toalla, sentarse en el banquillo de la esquina, ser atendido por su equipo y decir no más, final, se fue todo a la mierda. Pero no. Sobre los diez segundos, para ser más exactos, cuando el conteo iba en tres, se paró nuevamente: «Bien, pelao, parado, parado, ñero». En esta ocasión no estaba emboscado en una pelea sin sentido, tenía un enfrentamiento más personal y esta vez era con la vida, no podía darse por vencido. Hubo una serie de combinaciones de parte y parte que los dos adversarios esquivaron ágilmente, pero Aldemar, con sus brazos largos, lanzó dos *japs* que conectó en la cabeza de su contendor y después un *right hook* que golpeo su mandíbula, lo noqueo y venció. Adicciones y problemas con la vida. Sobre sus hombros alzó el cinturón que lo elevaba a la categoría de campeón en superación personal. Ahora este vencedor de la vida quiere sumar más metales en las competiciones distritales para representar a Bogotá en los juegos departamentales y en un futuro a Colombia en los Juegos Olímpicos.

Ciudad Bolívar pinta con su gente un nuevo futuro

*Este sector, tildado de violento e inseguro,
ahora es un lugar colorido donde la cultura,
el deporte y las buenas acciones están
alejando a los jóvenes de las calles, la
drogadicción y el alcohol.*

Entre montañas, diversidad de colores y 252 barrios repartidos en una superficie de 12.998 hectáreas, la localidad de Ciudad Bolívar es considerada por muchos bogotanos como el lugar más peligroso de la capital, pero para otros lo es todo: es arte, cultura, creatividad, naturaleza, un sector donde se reúnen diferentes culturas y etnias, es allí donde se cobijan los cerca de 719.700 sueños de aquellas personas que lo habitan.

Sus calles son polvorientas, sin pavimentar y sin ningún tipo de señalización, al menos ninguna oficial, de la Secretaría de Tránsito. La mayoría de las casas son muy humildes, las cuadras son estrechas y la única forma de llegar es en Transmilenio, hasta el portal el Tunal; desde allí en el Transmicable y con trasbordo en los buses azules del SITP, que demoran entre una hora y treinta minutos en pasar, o tomar alguno de los colectivos provisionales que hace mucho tiempo debieron haber salido de circulación. Probablemente es muy extendida la idea de que quienes viven allí no tienen ningún futuro, pero no, su realidad es totalmente diferente. A este sector muchas personas llegan procedentes del desplazamiento, la violencia o por penurias económicas; tienen la esperanza de cambiar su futuro y de salir adelante a pesar de los problemas que pueden encontrar en este sector: carencia de servicios públicos, violencia intrafamiliar, inseguridad, grupos de jóvenes armados, microtráfico y drogadicción; construyen sus viviendas con grandes ladrillos y ventanales que permiten contemplar toda la capital. Sus casas de dos o tres pisos, en ocasiones de cuatro o cinco, contra las normas de urbanismo, son habitadas por familias numerosas.

Según la Secretaría de Planeación, entidad encargada de formular, orientar y coordinar las políticas del desarrollo territorial, económico y social en la ciudad, más de la mitad de los predios son de estrato uno; otra gran parte, de estrato dos; y una tercera y pequeña porción no es estrato uno ni dos, es decir, está en el limbo, simplemente la conforman quienes viven en la cima de una extensa montaña. El panorama en los barrios de Ciudad Bolívar no es el más favorable, Está en las periferias de la ciudad, al sur, para ser más exactos; y limita al norte con la localidad de Bosa; al sur, con la localidad de Usme; al oriente, con las localidades de Tunjuelito y Usme; y al occidente con el municipio de Soacha.

Según la encuesta multipropósito del 2018, recogida por la Secretaría de Planeación, el 5 % de la población en Bogotá vive en condición de pobreza. Junto con Usme, Ciudad Bolívar es una de las dos localidades más vulnerables de la ciudad, ya que cuenta con altos índices de extrema pobreza y necesidad, en estos dos sectores de la ciudad se concentra el 8,94 % y 10,9 % de la pobreza en la ciudad, respectivamente, es decir, casi el 20 % de la ciudadanía en esta condición.

Así como en un extremo de la Bogotá se encuentra el santuario de Monserrate, famoso lugar de milagros y penitencias, también ubicado en medio de las montañas y con teleférico para quienes no pueden o no quieren subir a pie, al otro extremo de la ciudad está Ciudad Bolívar, sin teleférico pero con Transmicable, que desde diciembre el 2018 cambió la movilización y el transporte para todos, pero aun más para los habitantes de los barrios más altos de la localidad, aquellos que pasaban casi cinco horas diarias sentados en un bus para poder llegar a casa, hoy se gastan la mitad de ese tiempo.

No se pueden negar las muchas las problemáticas que aquejan a diario a los habitantes de esta localidad. Ciudad Bolívar se puede comparar con los municipios azotados por la violencia en las regiones: aquí la gente es trabajadora, emprendedora, recursiva y aguerrida, pero también vive sometida por fuerzas criminales capaces de oprimir y explotarla. En el 2018, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la posible presencia de integrantes de grupos armados ilegales, pertenecientes a las disidencias de las Farc, el ELN, el clan del Golfo y los puntilleros, quienes estarían reclutando jóvenes para conformar sus células urbanas. También están las pandillas que establecen fronteras

invisibles por la lucha del microtráfico. Hay violencia, eso se tiene que reconocer, pero también es un lugar de oportunidades, pues es el escenario que muchas organizaciones, entidades, iglesias y personas escogen como lugar de estudio para entregar donaciones y llevar a cabo proyectos sociales para quienes no cuentan con todos los recursos económicos estables para sobrevivir.

Alexander Rubio Álvarez nunca imaginó que dedicarse a la educación le daría la ocasión para inspirar tantas sonrisas en los rostros de pequeños niños en Ciudad Bolívar. Este gran educador se esmera todos los días por preparar sus clases de educación física de una manera dinámica. Por medio de actividades como el yoga y la libre expresión, les demuestra a sus estudiantes que el trabajo en equipo y la confianza en sí mismos es la mejor lucha contra cualquier opresor. Alexander está vinculado al sector educativo oficial de Bogotá desde 1999, y, tras su edificante labor, en el 2017 fue nominado a los premios Global Teacher Prize. A sus 45 años afirma que su trabajo en Ciudad Bolívar es una labor que desempeña con el alma y con mucho amor, porque lo que para él cuenta no es su profesión como maestro sino lo que puede llegar a lograr en la vida de cientos de niños de esta localidad. Así como la de Alexander, son millones las historias que se esconden dentro de esas fabulosas y coloridas viviendas que conforman los barrios de Ciudad Bolívar.

Aunque una de las más pobres y vulnerables de Bogotá, azotada por la violencia y la delincuencia urbana, también se debe decir que es una localidad llena fraternidad, amistad y amor, como la describe Juan David, un joven que ha vivido sus veinte años de edad en Ciudad Bolívar. Sonriente y con una mirada de esperanza, hoy recuerda su infancia con la alegría y la nostalgia del que más: aunque consciente de que su barrio, Vista Hermosa, no es el mejor de la capital, para él y sus amigos era el espacio ideal para jugar los interminables partidos que les permitiría anticipar quién sería el próximo diez de la selección Colombia, como entre risas lo recuerda.

Son muchos momentos felices que él ha compartido con quienes hicieron parte de su infancia y aún siguen haciendo parte de su vida, aunque para él también es importante mencionar que no todo eran risas o color de rosa, pues muchas veces, al ocultarse el sol, todos sabían que tenían que salir corriendo a casa para no salir lastimados. Juan David

y todos aquellos que allí viven así lo narran: esas mismas calles que en el día eran tranquilas, silenciosas y fraternales, al caer la noche se convertían en senderos oscuros y desolados, como los de un pueblo fantasma por donde nadie se atreve a transitar, pues en Ciudad Bolívar son muy comunes las llamadas «limpiezas» durante las cuales mataban aquellas personas que eran una «amenaza» para el sector. De esta manera murieron habitantes de la calle, jóvenes consumidos por las adicciones, expendedores de drogas y todos aquellos que aparecieran en una lista negra del vecindario. Hoy en día esta situación ha cambiado, porque existe más vigilancia y apoyo de las autoridades dentro de esta localidad. Según cifras de la Dijin, entre el 1.º de enero y el 1.º de mayo del 2019, se logró una reducción del 10,73 %, al pasar de 354 a 316 casos. Según la entidad, en la localidad de Ciudad Bolívar se redujeron en un 25,8 % las actividades delictivas, esto gracias a cerca de setenta actividades de intervención policial con ayuda de la Secretaría de Seguridad, entre las que se destacan operativos de inspección, vigilancia y control. Otras localidades que han reducido sus índices en materia de seguridad fueron Chapinero, Barrios Unidos, y Antonio Nariño, cada una en un 66 %; Kennedy, 22 %; y Bosa, 28 %.

Con todo y su lado oscuro, para Juan David su barrio es más que un montón de casas reunidas en la cúspide de una montaña: es vida, alegría y su espacio fraternal en donde comparte todos los días con quienes más ama, su familia. Pero como toda historia, esta tiene lo bueno lo malo y lo extraordinario. Es hora de mencionar un lugar donde, para muchos habitantes de este sector, todos los afligidos pueden dejar sus problemas, tristezas y preocupaciones. Con sus puertas enormes, un amplísimo salón sembrado de sillas de madera en hileras a lado y lado de un camino que lleva hasta el fondo, donde reposa una gigantesca cruz, la iglesia Oasis es un lugar de congregación, consagración y paz para muchas familias. Es justo en este lugar donde la magia de lo artístico florece. Esta iglesia es la principal fuente de ayuda para miles de personas que hoy en día no cuentan con los recursos económicos para vivir de manera estable y digna en esta localidad. El párroco, José Ignacio, es un hombre con no más de cincuenta años de edad, de tez morena y una sonrisa expresiva. Su preocupación son los cientos de jóvenes, niños, mamás cabeza de hogar y miles de familias que necesitan de una mano amiga.

Con diferentes cursos de música, batería, piano y conferencias de concientización y responsabilidad, José Ignacio es un sacerdote que le apuesta constantemente a la juventud y a los dones y talentos de miles de niños y jóvenes del barrio Vista Hermosa, de Ciudad Bolívar. Además, la iglesia siempre ha sido un punto de conexión con diferentes fundaciones y corporaciones que buscan brindar una ayuda a estas familias. En el 2016, una aerolínea reconocida se ofreció como donante de una obra social que congregaba a casi treinta voluntarios de diferentes países, entre ellos Argentina, Brasil, Estados Unidos y España, de donde llegaron con cientos de maletas llenas de comida, ropa, útiles, juguetes, con los que adelantaron una brigada de donación a millones de familias del sector, quienes salieron favorecidas y agradecidas con este gran trabajo social patrocinado por la iglesia.

Es así como Ciudad Bolívar, más que la localidad más pobre y peligrosa de la capital, le cuenta al mundo que, aún en medio de montañas y con sus calles sin pavimentar, allí viven y caminan personas de excelentes corazones, capaces de servir, cuidar, administrar con esmero todo lo que los rodea, personas con historias de vida que conmueven y enseñan, pero que, sobre todo, le demuestran al mundo que el valor verdadero de un lugar o una persona no está limitado a ningún estrato social.

Referencias

- Arévalo, A.I. (2014). "Periodismo y comunicación para la paz. Indicadores y marco regulatorio". Commons - Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital. Volumen (3) P. 59 - 64. Recuperado de: <file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-PeriodismoYComunicacionParaLaPazIndicadoresYMarcoR4734363.pdf>.
- Bernabé, J. (2004). Periodismo preventivo. Una herramienta para las soluciones pacíficas y conflictos internacionales. I Congreso Iberoamericano de Periodismo Preventivo, San José, Costa Rica. Recuperado de: <https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Educaci%C3%B3n/Periodismo%20Preventivo,%20J.Bernabe.pdf>
- Bogotá cómo vamos (2016) *Informe calidad de vida 2017*. Bogotá: Bogotá Cómo Vamos. Recuperado de: <http://www.bogotacomovamos.org/interactivo-informe-calidad-2016/>
- Dane (2010). Estadísticas vitales. Defunciones por causa externa. Recuperado de: <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimiento-y-defunciones/defunciones-no-fetales/defuncion-externa-dpto>
- De la Fuente, J. R. (2017). "Violencia colectiva". Ciudad de México: Periódico El Universal. Recuperado de: <https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/juan-ramon-de-la-fuente/nacion/2017/06/19/violencia-colectiva>.
- El Espectador (2016). "Estas son las localidades con mayor delincuencia juvenil en Bogotá. Bogotá: El Espectador. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/noticias/bogota/estas-son-localidades-mas-azotadas-delincuencia-juvenil-articulo-613127>.
- El Tiempo (2016). "El estado tiene en custodia 3.515 hijos de la miseria". Bogotá: El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/ninoshabitantes-de-calle-bajo-proteccion-del-icbf-30562>.
- Friendrich, E. (2015). *Violencia urbana y gestión de la seguridad en Bogotá*. Bogotá, Colombia: Aguilar. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/13181>.
- Gehring, H. (2014). *Pistas para narrar la paz, periodismo y posconflicto*. Bogotá: Consejo de Redacción.
- Gómez, A. (2018) Entrevista con Alberto Gómez, 13 de marzo del 2018.

- La Parra, D. y Tortosa, J. M. (2003). “Violencia estructural: una ilustración del concepto”. En: revista Documentación Social, 131. Alicante: Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo, GEDYP, Universidad de Alicante.
- La Roux, G. (1994). Ciudad y violencia en América Latina. Andros limitada: Santiago de Chile. Recuperado de: <http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/42215.pdf>.
- Libardo, S. (2000) Políticas públicas de la juventud en Colombia – logros, dificultades y perspectivas. Bogotá. Recuperado de: http://207.58.191.15:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/100/Tecnico_20.pdf?sequence=1.
- Medrano, V. Z. (2010). Violencia urbana. Perú: Monografias.com. Recuperado de: <https://www.monografias.com/trabajos82/la-violencia-urbana/la-violencia-urbana.shtml>
- OMS (2002). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
- Perea, C. M. (2013). “Resituar la ciudad: conflicto violento y paz”. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43662>
- Santos Pinzón, L. D (S,f) Las políticas públicas de juventud en Colombia: una mirada histórica. Recuperado de: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FDlrIglyzYJ:https://www.tigweb.org/actiontools/projects/download/1936/Las%2520pol+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co>
- Sarmiento, L. (2003) Política pública de juventud en Colombia. Bogotá: Unicef. Recuperado de: <https://www.unicef.org/colombia/pdf/PoliticasyJuv2.pdf>.
- Saumeth, E. (2011) *Historia de la guerra en Colombia*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Fora, Brasil. Recuperado de: <http://ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/HGC.pdf>
- Torres, C. (2005). Jóvenes y Violencia. Revista Ibero Americana. Jóvenes y la Violencia. Edición 37. Rio de Janeiro, Brasil. Recuperado de: <https://rieoei.org/historico/documentos/rie37a03.htm#3>
- Tuñón, L. (2016) ¿Cómo afecta la pobreza en la vida de los niños y niñas? Buenos Aires. Blog Primeros pasos. Recuperado de: <https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2016/10/13/erradicacion-de-la-pobreza/>.